

Seguridad Alimentaria y Medio Ambiente

EN BUSCA DE ALTERNATIVAS SOLIDARIAS PARA CONSTRUIR SOBERANÍA ALIMENTARIA

Héctor Mauricio Gallego Arias *

Durante la década de los noventa surgieron en Colombia diversas expresiones organizadas de iniciativa popular que reaccionaron contra las políticas de globalización de la economía. Sin embargo, mientras muchas de esas expresiones terminaban en manifestaciones públicas de descontento popular, otras iniciativas que aportaban propuestas alternativas y de resistencia a la normatividad nacional y global, se posicionaban y avanzaban en pequeña escala

en comunidades locales que ponían en práctica la premisa de pensar en forma global y actuar localmente.

Se entendía —ante la imposibilidad de resolver la miseria en el país—, que era preciso avanzar desde lo pequeño, confrontando el discurso reivindicatorio con la práctica cotidiana. En este período se crearon diferentes expresiones organizadas que ni siquiera estaban contempladas en el orden jurídico colombiano, como es el caso de las redes y grupos de interés alrededor de temas específicos como la agricultura, la educación ambiental, la economía solidaria y los derechos humanos. Alrededor de estas redes se empezaron a conocer y a construir iniciativas concretas de resistencia y de desarrollo alternativo.

En el debate en torno a la seguridad alimentaria del país, muchas iniciativas concibieron que las políticas estatales para la agricultura no podían desligarse de las políticas de protección ambiental, porque no encontraban razonable resolver la seguridad alimentaria nacional a cualquier precio y de cualquier manera, puesta en juego la base de recursos naturales y culturales, así como la salud pública de la población. El ambientalismo abandonó la postura de conservar por conservar e incorporó el interrogante acerca de para qué y para quién la conservación.

En esta nueva perspectiva, las respuestas, ya no podían ser imparciales, exigían un sentido comunitario y vinculado a lo popular, donde la noción de seguridad alimentaria no se podía concebir aislada de la necesidad de conservar los recursos naturales y de poder decidir qué clase de alimentos



se querían consumir. Tal vez por esto se dedujo que la posibilidad de garantizar la seguridad alimentaria era un asunto de soberanía. Igualmente, se visibilizó la lucha por la defensa de la biodiversidad o patrimonio genético; y se empezó a concebir el conocimiento tradicional de las comunidades locales como parte del patrimonio nacional. Sin embargo y contrario a lo que se podía esperar, el Estado no tomó posición a favor de las pro-

puestas comunitarias y en contra de la presión privada. Consecuentemente, estas defensas han avanzado hasta el campo de la confrontación de las políticas y la regulación transnacional que propenden por la privatización del conocimiento tradicional y las riquezas naturales como la última fase del saqueo histórico a las comunidades.

Este contexto explica por qué las organizaciones ambientalistas han incorporado los componentes de seguridad y soberanía alimentaria en sus procesos de acompañamiento a las organizaciones comunitarias. La conservación del ecosistema no se concibe como algo que avance por un lado de la cordillera y la producción de alimentos por la otra vertiente. En esos ecosistemas se produce la mayor parte de nuestra comida, y la certeza de que se siga produciendo depende de la seguridad de que las comunidades permanezcan en sus territorios. En consecuencia, la nueva lucha del ambientalismo tiene que ver con la defensa de las últimas generaciones de agricultores de economía campesina. Sin embargo, la globalización avanza, a pesar del ambientalismo y de la economía campesina.

El hambre en el mundo

Los informes de la FAO [Food and Agriculture Organization of the United Nations (N. del E.)] permiten deducir que la capacidad actual de producir alimentos en el mundo es suficiente para alimentar casi al doble de la población existente; que el problema del hambre, la desnutrición y el desabastecimiento alimentario no está intrínsecamente relacionado con factores tecnológicos de productividad.



Empero, a nuestros agricultores quieren convencerlos a la fuerza, de su escasa competitividad y que por lo tanto tienen que dedicarse a otro oficio. Tan denodado esfuerzo permite sospechar sobre la existencia de una intención globalizadora de acabar con la economía campesina para garantizarle el monopolio alimentario a unos cuantos países y compañías trasnacionales.

Es aberrante constatar que mientras diariamente miles de personas mueren de hambre y otros millones agonizan por desnutrición, sin ejercer el derecho a comer siquiera una vez por día, los inventarios de granos y cereales en los países desarrollados se multiplican gracias a los excedentes de una agricultura subsidiada. La venta de esos inventarios no comprometen las necesidades internas cuando se ofrece a los países tercermundistas a costos con los que es imposible competir. En estas condiciones, el subsidio actúa como un instrumento de los Estados desarrollados para garantizar el monopolio, el control de la producción y el mercado. Por más eficientes que fuesen nuestros agricultores, el sistema imperante tiende a excluirlos del mercado porque no es posible competir en condiciones desiguales. En este sentido, la persuasiva afirmación formulada por la ideología globalizadora según la cual la ciencia y la biotecnología representan el camino para acabar con el hambre en el mundo, no dista de los sofismas con que la "revolución verde" impuso su modelo agrícola de dependencia insostenible. En realidad, el hambre mundial no es consecuencia de factores tecnológicos que limiten la productividad, sino de condicionamientos políticos interesados en manipular el hambre como un componente más de un gigantesco negocio trasnacional.

Pero el subsidio no es el único instrumento utilizado para garantizar el control del comercio, de la producción y de todos los bienes asociados al tráfico alimentario, tales como los agroquímicos, las semillas, los insumos, la maquinaria y el sistema de extensión. La normatividad es el otro arsenal privilegiado para lograr lo mencionado, ya que ésta se vuelve más restrictiva cuando se presume obstáculo al libre comercio internacional y, bajo esta premisa, se vulneran los derechos al libre intercambio de bienes en las comunidades tradicionales, se privatiza la biodiversidad en los territorios de Estados soberanos y se le impide a los consumidores conocer el origen y el modo de producción de sus alimentos.

Acorde con lo antes mencionado, es dable considerar a la agricultura como un negocio transnacional sostenido con subsidios y respaldado con un sólido escudo normativo. Considerada así, es posible ver en el telón de fondo, que el obstáculo para resolver el problema de la seguridad alimentaria en Colombia no se reduce a las limitaciones tecnológicas. Es decir, no se trata de que seamos retrasados, ni que la violencia impida el desarrollo; el problema va mucho más allá del contexto de la violencia y la exclusión.

Por ejemplo, podría darse el caso de una solución pacífica al conflicto armado colombiano, con una hipotética restitución de las tierras otrora propiedad de los campesinos y un acceso generoso al crédito por parte del Estado, y no estaríamos resolviendo las necesidades alimentarias de nuestra población, porque el problema no depende de la tecnología ni de la productividad, sino del modelo construido más allá

de las fronteras patrias e impuesto desde hace décadas en nuestra sociedad. Tal modelo agrícola está diseñado para prolongar e intensificar la dependencia alimentaria, porque tierras para la agricultura tenemos en abundancia. En los países del norte, la agricultura es un negocio tan poco rentable que se le subsidia, y los agricultores, aún perdiendo sus cosechas, ven asegurados sus ingresos. Bajo las circunstancias vigentes en nuestro país es tan poco lucrativo el negocio, que los terratenientes, detentadores de las mejores tierras, prefieren destinarlas a otros fines, principalmente el de la ganadería extensiva, contribuyendo a la expansión del mayor problema ambiental de nuestro tiempo: la ganaderización y potrerización del territorio, con la consecuente eliminación de la biodiversidad, la erosión de suelos y el desplazamiento poblacional.

No obstante, hay una gran diferencia entre los agricultores que producen por negocio y los que lo hacen por necesidad. Los primeros, si no derivan suficientes ganancias, pueden buscar alternativas en la ganadería, los frutales, o algún producto de alta demanda internacional; los segundos, no tienen otra opción y prácticamente están obligados a producir en las desventajosas condiciones que conocemos. Así, los sectores populares del campesinado están conminados a producir en suelos degradados, ácidos, inclinados, pobres en nutrientes y con altas toxicidades; a generar riqueza en minifundios, en microfundios, en tierras prestadas o arrendadas; costeadando altos fletes; sin soportes financieros, sometidos a la usura de la intermediación, desterrados a los ecosistemas más frágiles, y con todo, acusados de ser poco competitivos.

Cuando se liberen los mercados internacionales, nuestro agricultor del corregimiento de San Cristóbal –por mencionar un caso en la ciudad de Medellín– que cultiva lechugas en un área de media cuadra, de la cual sobreviven seis personas, y que vende la unidad a doscientos pesos; verá invadida su plaza con lechuga extranjera a un costo de cien pesos, enviada por un agricultor que ha sembrado en un área veinte mil veces más extensa, a menores costos y subsidiado; ese campesino, el nuestro, tendrá que vender la suya a ochenta pesos mientras cambia de oficio, vende su predio y busca un empleo en alguna maquiladora. Entre tanto, esos pequeños cultivadores son quienes abastecen de alimentos a la mayor parte de nuestra población, ya que los mayoristas sólo quieren producir aquello que sea rentable y que en lo posible se pueda exportar, especialmente productos complementarios que no hacen parte de la dieta básica alimentaria, tales como palma africana, caucho, banano, flores y frutas exóticas.

Cuál seguridad alimentaria hombre

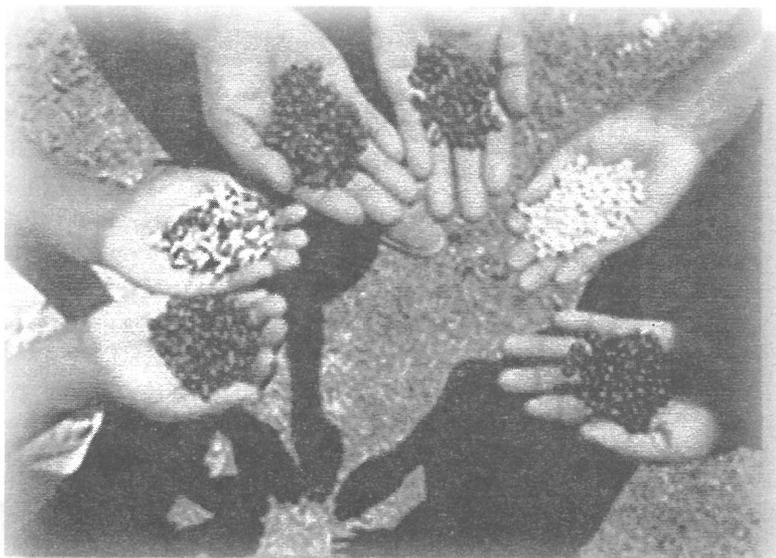
En la medida que se ha puesto en el escenario el hecho de que no se puede concebir la conservación ambiental separada de los actores sociales y de la protección o destruc-

ción de los ecosistemas y agroecosistemas, se han ligado, en los procesos de acompañamiento a las comunidades campesinas, las diversas alternativas de conservación y de producción integradas a la seguridad alimentaria.

En contravía de lo mencionado, en nuestro país las políticas ambientales han estado por un lado y las de seguridad alimentaria por el otro. En algunas casos el incentivo a la producción se disfraza de programitas de seguridad alimentaria caracterizados por regalar semillas mejoradas, insumos químicos y razas de animales que no se reproducen; o por la promoción de cultivos que no pueden garantizar sostenibilidad porque son altamente dependientes de agroquímicos y se basan en variedades híbridas o transgénicas que tienen la “des virtud” de que no generan semillas que reproduzcan el cultivo.

Pero la seguridad alimentaria, desde la concepción de las organizaciones populares, trasciende lo aseverado, ya que no sólo implica autoconsumo y abastecimiento, sino la forma como esto se logra. Va más allá de unas alternativas para no morir de hambre y llega hasta la construcción de propuestas sostenibles que no dependan de programas externos. Y cuando hablamos de la capacidad de que esas propuestas individuales se traduzcan en procesos organizados que puedan incluso desafiar la normativa adversa, entonces estaríamos construyendo soberanía alimentaria.

Cuando las comunidades deciden consolidar los mercados locales, partiendo de los buenos niveles de confianza entre consumidores y productores, lo que acontece en la práctica es una respuesta y una resistencia a los elitistas procesos de certificación agroecológica a los que sólo pueden acceder los industriales y los que ven en el mercado verde un negocio. De hecho, la normativa al respecto parece diseñada para mejorar los niveles de exclusión, de tal manera que ningún pequeño agricultor pueda cubrir los costos asociados a la certificación; ésta es concebida como el proceso utilizado para que los productos que se venden como



ecológicos tengan un sello de garantía; sin ese sello es ilegal informar que el producto es ecológico. Sin embargo, el comercio basado en la confianza entre consumidores y productores es una alternativa de soberanía alimentaria que se resiste a la normativa y a los modelos de control del mercado.

De igual manera, cuando los campesinos deciden conservar y recuperar el germoplasma nativo, están respondiendo con alternativas locales a las estrategias de las transnacionales que con sus semillas híbridas, transgénicas, estériles y patentadas; pretenden arrebatar el derecho milenario de los campesinos a intercambiar libremente sus semillas o material de propagación. Para ello, tales empresas se amparan en normativas sobre patentes que dicen al campesino que no puede intercambiar semillas libremente porque se convierte en trasgresor de la ley, en un delincuente.

En respuesta a esta amenaza global, especialmente a la expresada en la política transnacional de monopolizar el mercado de semillas, se ha consolidado un movimiento mundial de resistencia que promueve la recuperación y conservación de las semillas a través de la creación de bancos de germoplasma que funcionan en las mismas parcelas de los agricultores.

Las experiencias que se promueven en esta dirección por algunas organizaciones sociales avanzan en este contexto, pero el camino que falta no está despejado. Todavía las

experiencias de mercados alternativos son incipientes y aún es intención la normativa a la que se aspira desde hace varios años para proteger a la economía campesina; al contrario de lo proyectado, los cambios legislativos que se están logrando sólo favorecen a los sectores agrícolas vinculados a la gran industria y a la economía de exportación.

Lo claro es que con la incursión en el escenario colombiano de los poderes mundiales que puján por imponer sus políticas de liberación de las economías nacionales, se impone en nuestra sociedad y territorio un sistema de productividad y competitividad agropecuario basado en enfoques agroindustriales e intensivo en el uso de capital, información, conocimiento y tecnología. Este modelo de relación con el ecosistema y las comunidades, torna en incompetente a cualquier pequeño productor, provoca su exclusión del mercado y en consecuencia debilita a gran escala la economía campesina de la que depende significativamente la soberanía y la seguridad alimentaria de las regiones y localidades de nuestro país. En esta rápida y dramática sucesión de cambios y frustraciones, aún están por construirse las propuestas alternativas para proteger a las comunidades campesinas y al saber y riqueza que entranan.

* Comunicador Social Corporación Guardabosques. E-mail: cgbosques@yahoo.es



CONCEJO DE MEDELLÍN

EL CONCEJO DE MEDELLÍN

dispone de un centro de conocimiento para la formación y la cultura ciudadana, especializado en las áreas de administración pública, derecho, historia y desarrollo de nuestra capital:

BIBLIOTECA CARLOS MAURO HOYOS

Abierta de lunes a viernes
Teléfono 3846829

¡El Concejo es oído!